

VOTAR ENTRE BALAS:

Entendiendo la violencia
criminal - electoral en México

Policy Brief



DATA CÍVICA
Más datos para más personas

ÍNDICE

Introducción	3
Tendencias en la violencia criminal-electoral en México	3
Perfiles de las víctimas	6
Hallazgos sobre diferencias regionales	9
Víctimas por partido	13
Resumen y reflexiones finales	13

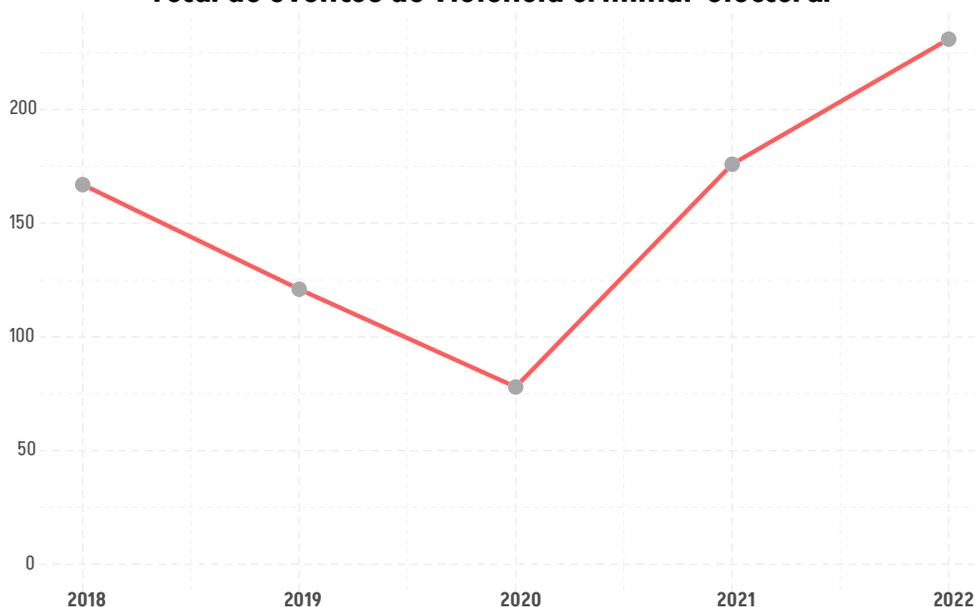
Introducción

El proyecto Votar entre Balas tiene el propósito de analizar la “violencia criminal-electoral”, la cual se refiere a cualquier acto organizado o amenaza por parte de organizaciones criminales que ocurre durante un proceso electoral, desde la fecha de nominación para un cargo político hasta la fecha de las elecciones, para intimidar, dañar físicamente, amedrentar, o eliminar a un actor político (Sberna, 2011). Para comprender este fenómeno, sin embargo, fue necesario recolectar información de las tendencias y eventos de violencia más allá de los periodos electorales, con el fin de identificar la lógica de los ataques perpetrados por el crimen organizado y tener la posibilidad de realizar comparaciones. Así, los datos que a continuación se reportan tienen la capacidad de capturar procesos mucho más profundos y más allá de las elecciones, aunque siempre centrados en la violencia generada por el crimen organizado según la metodología propuesta en este proyecto.

Tendencias en la violencia criminal-electoral en México

De 2018 a la fecha han habido alrededor de 773 ataques que en Data Cívica relacionamos con violencia criminal-electoral. En los últimos cinco años, el año con más ataques es 2022¹, este año hemos registrado un total de 230 eventos de violencia criminal-electoral. Después de 2022, siguen 2021 y 2018 con 176 y 167 respectivamente. Conviene notar que en 2022 no hubo elecciones locales más que en cinco estados. Sin embargo, hubo más ataques que en 2021, cuando hubo más elecciones, y más que en 2018, cuando hubo elecciones en casi todo el país.

Total de eventos de violencia criminal-electoral



Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

¹ Con datos analizados hasta julio de 2022.

Sabemos que la mayoría de los eventos de violencia criminal electoral ocurren en contra de autoridades locales, el 82% de las autoridades y el 78% de los miembros de partidos que fueron atacados tenían un cargo municipal. Cabe mencionar que de todos los ataques que ocurrieron en 2022, sólo el 11% ocurrieron en estados donde hubo elecciones locales. Esta tendencia es distinta a lo que pasó en 2021 cuando el 23% de los eventos ocurrieron en estados con elecciones locales. Sobre la relación entre ambas cosas, conviene ver las gráficas de abajo. Es posible notar que las elecciones locales no siempre coinciden con los ataques. En los últimos tres años, los acontecimientos se han concentrado en el bajío y sur del país, independientemente de si hay o no elecciones locales. Lo que notamos es que en algunas entidades la violencia ocurre un año posterior a las elecciones. Eso es algo que se puede notar en 2022, por ejemplo, en Nuevo León y es algo que puede estar muy relacionado con la incertidumbre que genera la alternancia política en grupos criminales. Si bien los ataques relacionados con la violencia criminal no son exclusivos de los procesos electorales, sí están asociados con los procesos políticos que se derivan de los cambios electorales, incluso en meses posteriores a las elecciones.

¿Dónde ha habido elecciones?



Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

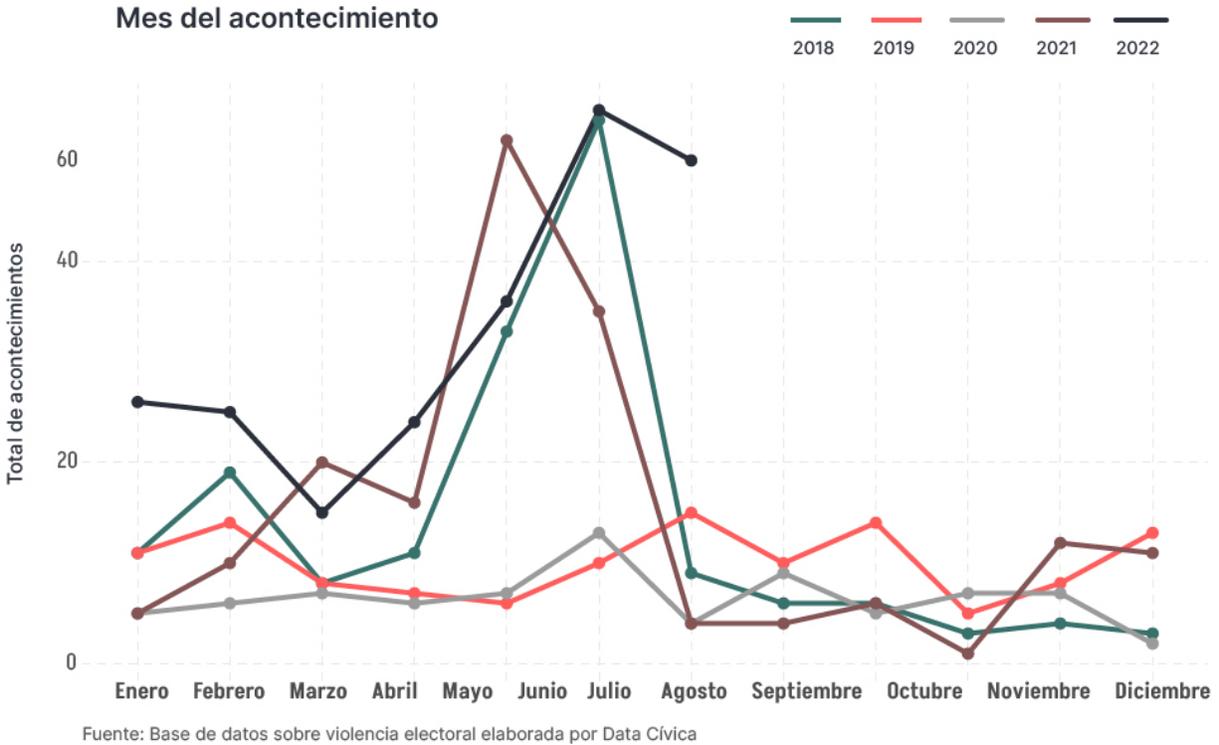
¿Dónde han ocurrido los acontecimientos?



Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

Cabe mencionar que a pesar de que la violencia no necesariamente ocurre sólo en los estados en los que hay elecciones, la temporalidad de la violencia sí parece estar marcada por el ciclo electoral. En prácticamente todos los años observados, excepto 2020, los meses en los que hubo más eventos violentos fueron mayo y junio; los meses en los que ocurren las elecciones.

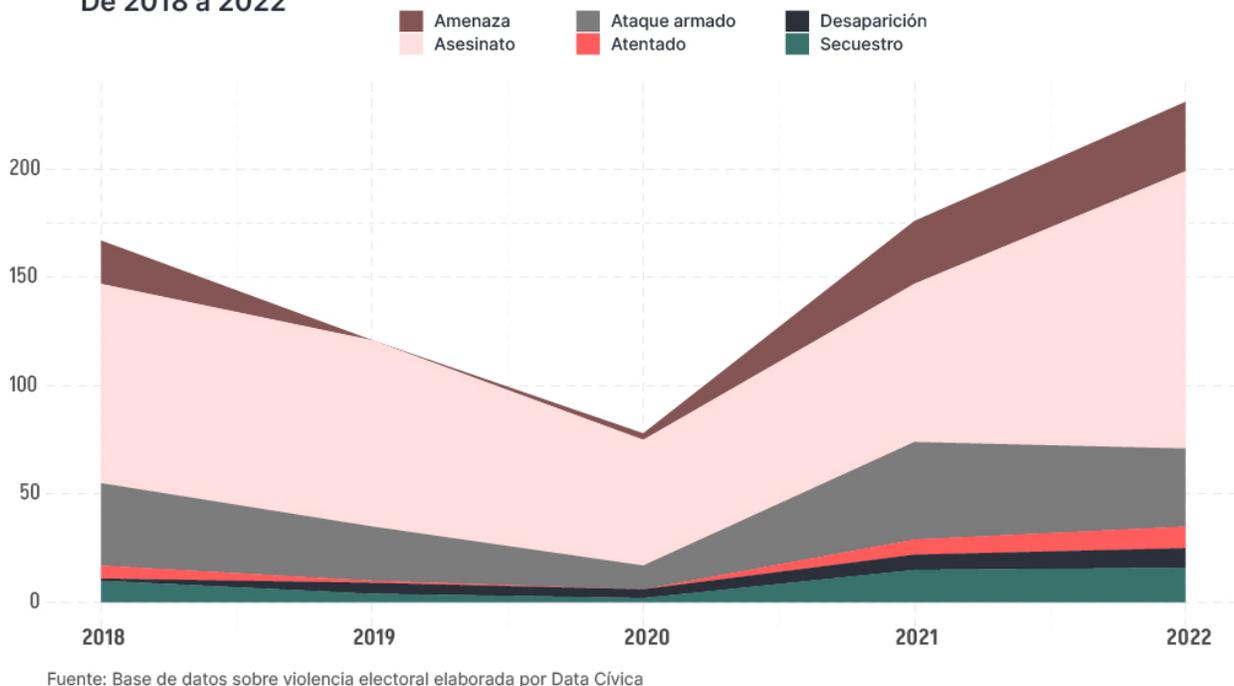
¿Cuándo fueron las amenazas, ataques o asesinatos?



Dentro de los cambios en los tipos de ataques, también valdría la pena mencionar que las amenazas han ido ganando terreno dentro de los acontecimientos. Mientras en 2018, las amenazas representaban el 11% de los acontecimientos, en 2021 y 2022 llegaron a representar el 17% y 14% de los mismos. Este cambio en el tipo de ataques podría hablar del modus operandi del crimen organizado para avanzar sus agendas, aunque, dado que nuestro análisis se basa en fuentes

Tipos de ataques de violencia electoral ocurridos

De 2018 a 2022



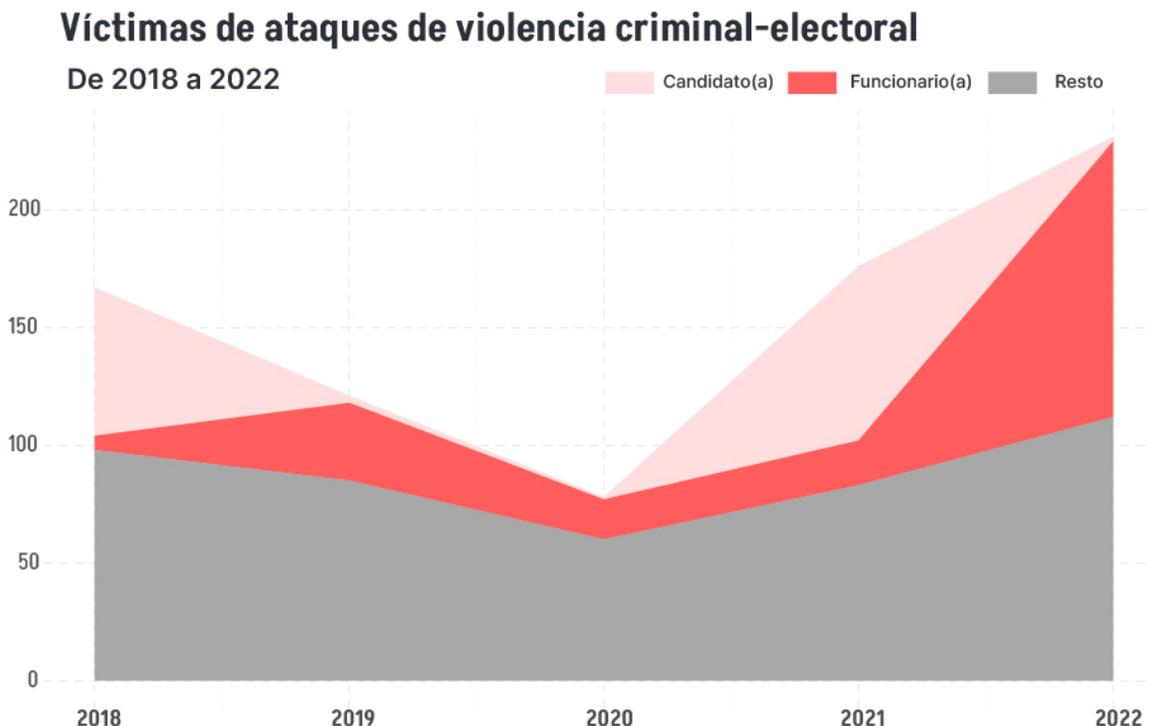
hemerográficas, también podría hablar de las decisiones editoriales. En ese sentido se rebasa nuestra capacidad de hacer conclusiones contundentes al respecto.

Con la misma limitación observamos que los ataques armados también han crecido de manera considerable. Dentro de los acontecimientos registrados, los ataques armados en 2021 llegaron a representar el 25% de todos los eventos ocurridos mientras en años anteriores no habían pasado del 21%.

Perfiles de las víctimas

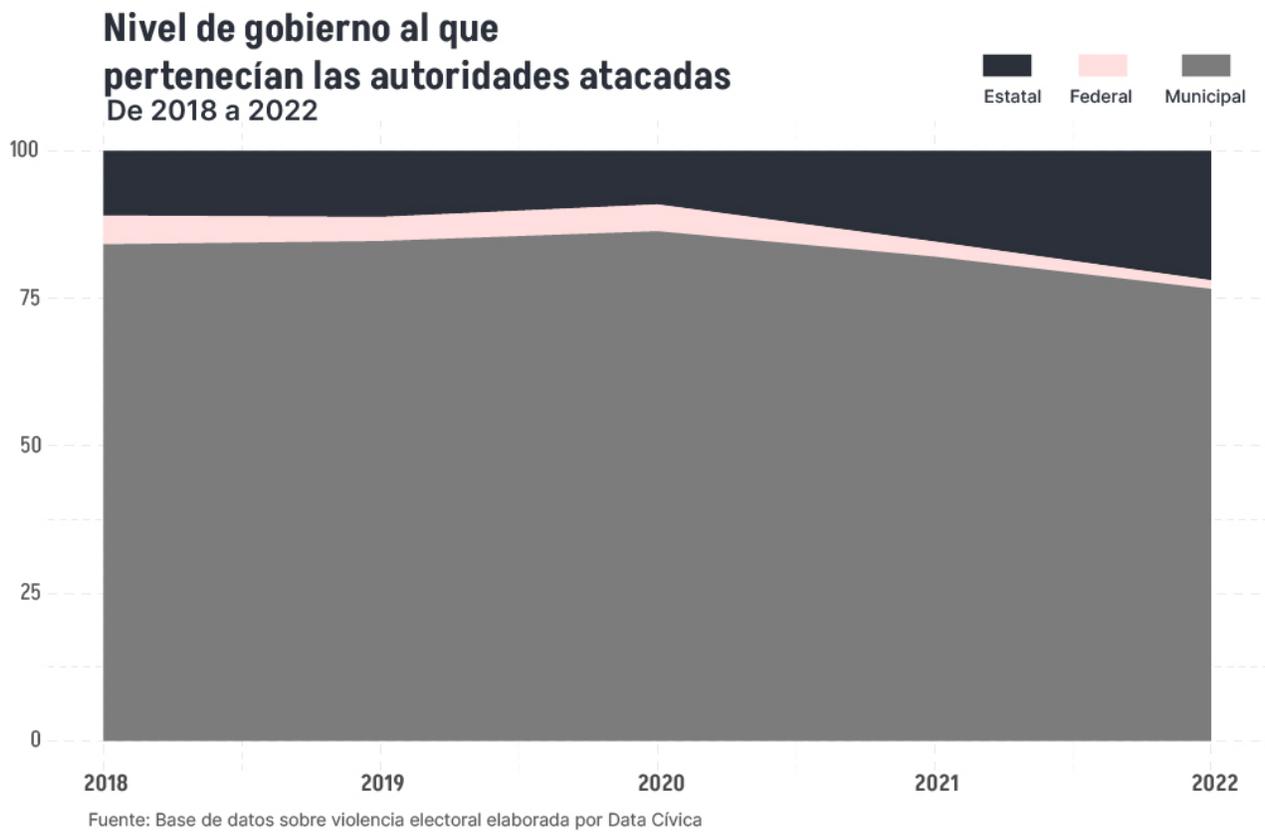
De 2018 a la fecha ha habido 755 víctimas de ataques de violencia criminal-electoral. El perfil con más eventos es el de Candidato; casi una de cada cinco víctimas era candidata a un puesto de elección popular. De los 143 candidatos que a la fecha han registrado ataques, 117, es decir el 81%, tenían una candidatura municipal. Como es de esperarse, el porcentaje que los candidatos representan dentro de las víctimas varía según las elecciones que haya en el año.

Uno de los cambios más importantes en los últimos cuatro años tiene que ver con la cantidad de víctimas que son funcionarios públicos. Mientras en 2018 representaron sólo el 3%, para 2022 han representado el 53% de las víctimas. Esto refleja al uso de la violencia criminal-electoral como una forma de controlar espacios más amplios de la política más allá de los contextos electorales.



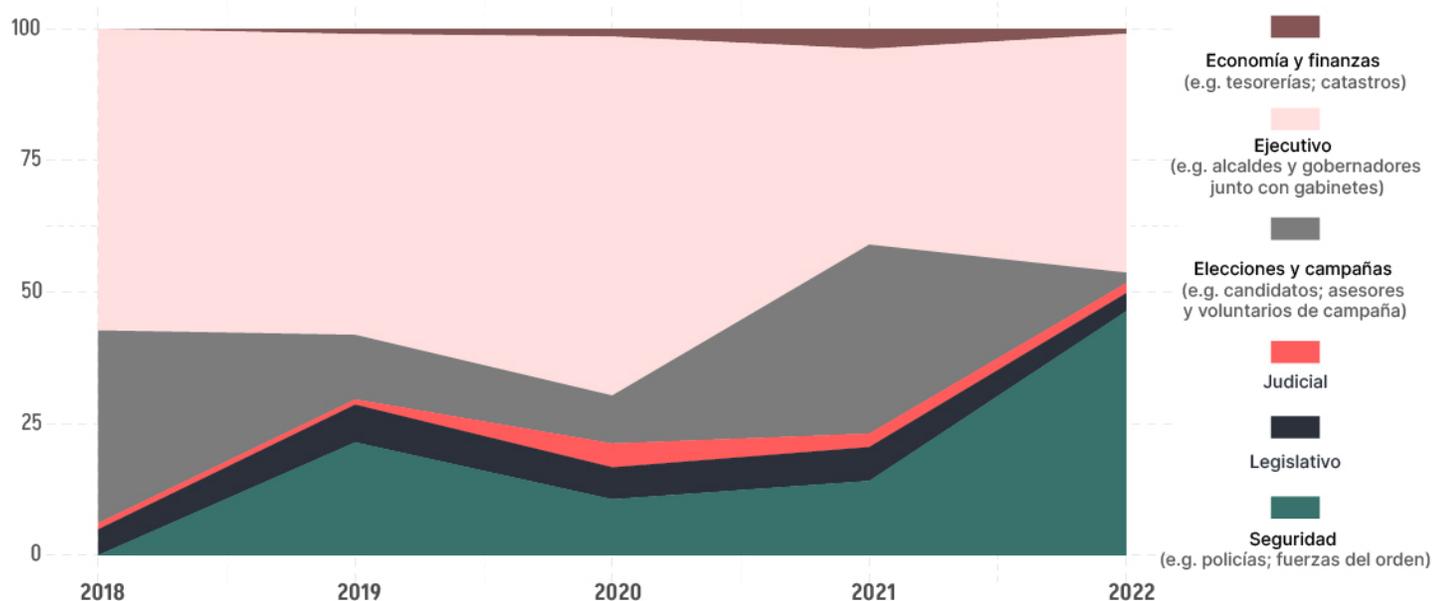
Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

Cabe mencionar que de 2018 a la fecha, los funcionarios municipales, a diferencia de los funcionarios en otros niveles de gobierno, han sido el principal objetivo de la violencia criminal-electoral. Como puede verse en la gráfica siguiente, desde hace cuatro años han representado al menos el 77% de los funcionarios atacados. En 2022 han representado el porcentaje más bajo de funcionarios atacados con 77% y en 2020 el más alto con 86%.



Si vemos en qué áreas del gobierno trabajaban las autoridades que han sido atacadas, veremos que las personas en el ejecutivo han sido aquellas que han tenido la mayor cantidad de ataques, sobre todo entre 2018 y 2020. Si bien no lo sabemos a ciencia cierta, sugerimos que esto se puede deber a las funciones que se realizan desde el poder ejecutivo, desde las políticas de seguridad a la administración municipal, tareas que podrían resultar claves para la operación del crimen organizado. Asimismo, queremos resaltar que en los últimos años han incrementado significativamente los ataques a funcionarios en materia de seguridad. Mientras en años anteriores representaron como máximo un 21%, en 2019, en 2022 representaron el 46% del total de autoridades atacadas; más del doble.

Área de gobierno al que pertenecían las autoridades atacadas De 2018 a 2022



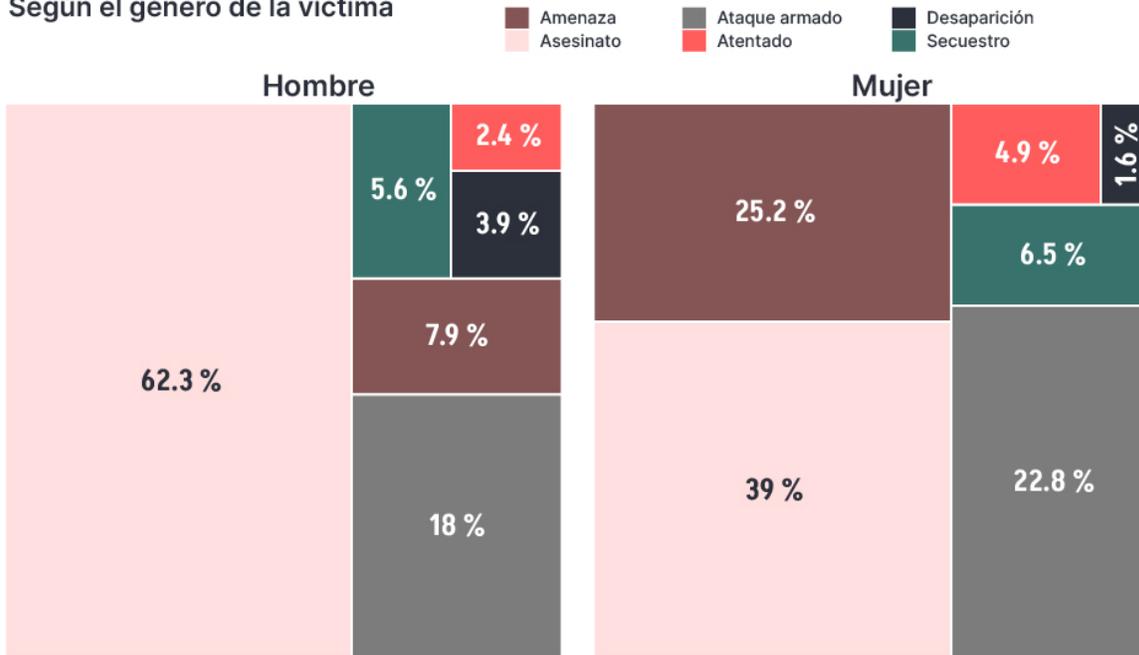
Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

Sobre las características sociodemográficas de las víctimas, el 82% de las personas que han sido víctimas en un evento de violencia criminal-electoral son hombres. En 2018 y 2021 el porcentaje de mujeres víctimas subió ligeramente. En 2021 alcanzó su proporción más alta llegando a 21%. En este sentido, es importante mencionar que las mujeres viven la violencia de una forma distinta a los hombres. Mientras el 62% de los hombres víctimas fueron asesinados, sólo el 40% de las mujeres lo fueron. Del mismo modo, mientras el 25% de las mujeres víctimas fue amenazada, sólo el 8% de los hombres lo fue. Asimismo, mientras el 22% de las víctimas mujeres sufrieron un ataque armado, sólo el 18% de las víctimas hombres vivieron lo mismo. Pareciera que la violencia contra las mujeres es menos letal, aunque esto nos lleva a preguntarnos si realmente es así o si las mujeres se retiran de las contiendas o puestos antes de que la violencia escale.

En este sentido, también vale la pena tener en cuenta que los perfiles de hombres y mujeres víctimas son ligeramente distintos. Mientras el 37% de las mujeres víctimas eran candidatas en el momento del evento, sólo el 17% de los hombres víctimas lo era. También es interesante que el segundo perfil más frecuente entre mujeres víctimas es el de familia; es decir una persona no relacionada directamente con el gobierno o la política, pero que tiene una relación de parentesco con un funcionario o político. Finalmente, también llama la atención que mientras el 24% de las víctimas hombres son funcionarios, sólo el 6% de las víctimas mujeres lo son. De nuevo, esto puede hablarnos de una aproximación distinta de grupos criminales hacia las mujeres o también puede que las mujeres ocupen posiciones en el gobierno menos susceptibles a este tipo de ataques.

Tipos de ataques de violencia electoral ocurridos

Según el género de la víctima

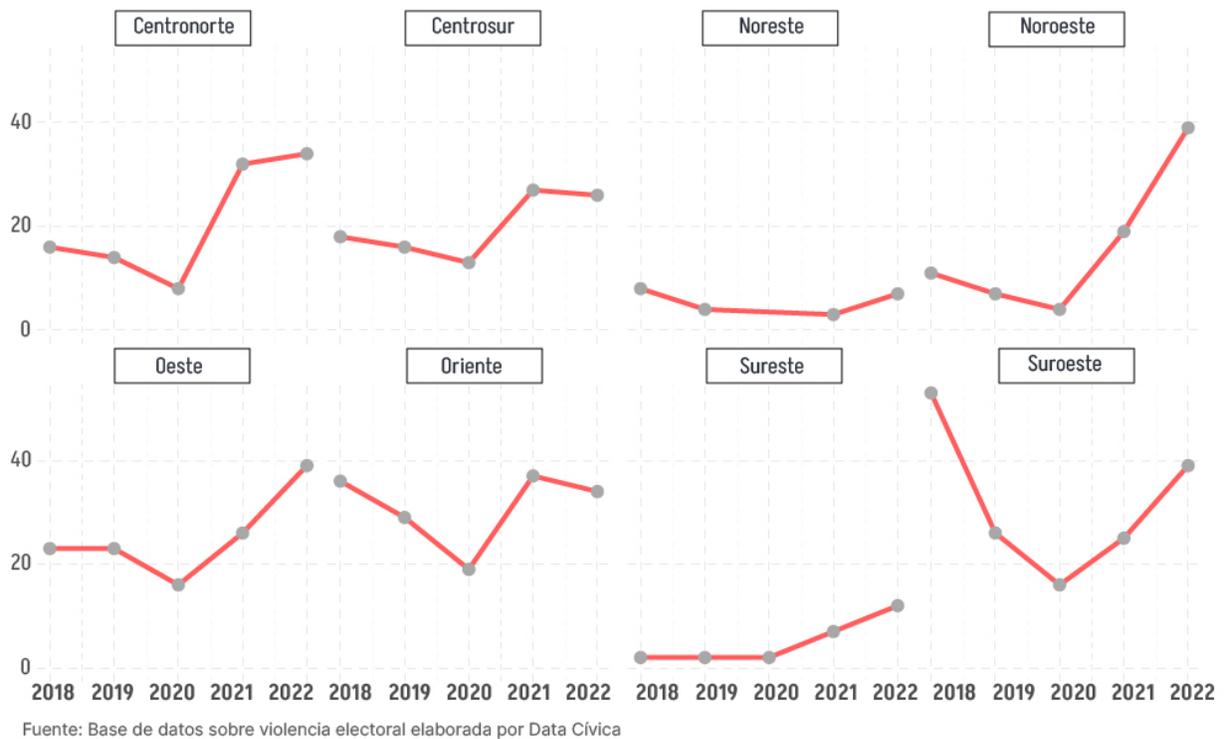


Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

Hallazgos sobre diferencias regionales

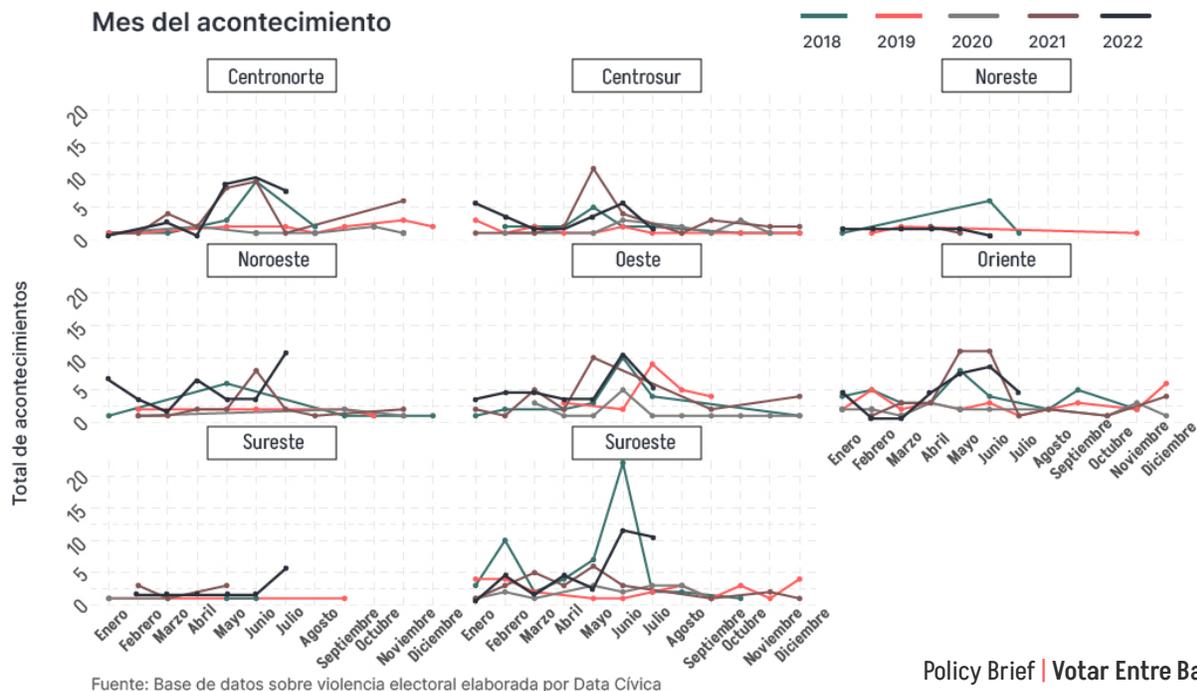
Al dividir este análisis según la región del país podemos ver que, en primer lugar, el aumento en los eventos de violencia criminal electoral no está sucediendo al mismo nivel en todo el país. En tres de las ocho regiones podemos notar un aumento muy claro y pronunciado de los eventos; centronorte, noroeste y oeste. Estas regiones corresponden a los estados Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí; Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora; y Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, respectivamente. Existen un par de regiones, donde vemos un aumento más modesto de los eventos; el centrosur del país, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, y el sureste, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. En otras dos regiones del país no vemos un aumento tan claro; el noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y el oriente, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. Finalmente, el suroeste es un caso particular, ya que aunque vemos un aumento desde 2021, la región, que contempla Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no ha alcanzado, afortunadamente, los niveles de violencia de 2018.

Total de eventos de violencia criminal-electoral Por región



Otro tema que también varía ligeramente tiene que ver con las fechas en las que han ocurrido los acontecimientos. Aunque seis de las ocho regiones muestran un aumento de los ataques durante el verano, cuando suele ocurrir la actividad electoral, no todas muestran patrones igual de consistentes. Además en tres de las ocho regiones, noreste, noroeste y sureste, no parece que los ataques estén definidos por el ciclo electoral.

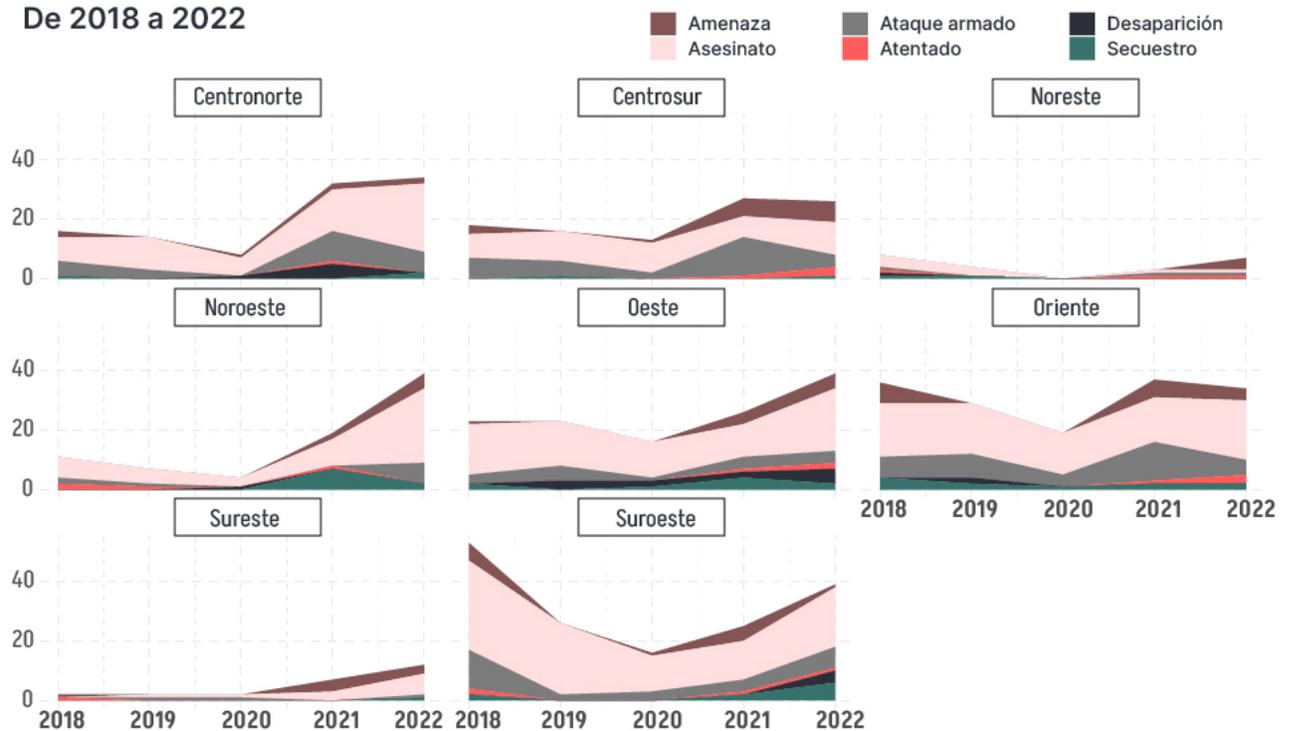
¿Cuándo fueron las amenazas, ataques o asesinatos?



Cuando vemos cómo han cambiado los tipos de ataques a nivel regional desde 2018, también vemos algunas diferencias importantes. En primer lugar, esta gráfica nos permite notar que el aumento de ataques armados que vemos en 2021 a nivel nacional tiene su origen en principalmente tres regiones; el centronorte, el centrosur y el oriente del país. En cambio, el aumento en asesinatos parece estar ocurriendo en al menos cuatro de las ocho regiones; centronorte, oeste, oriente y noroeste. El aumento de homicidios es especialmente notorio en esta última región en la que además se duplicaron los ataques en 2022 con respecto a 2021. Finalmente, el aumento en las amenazas parece ser una característica del centrosur y el oriente del país; regiones donde la violencia sólo ha aumentado ligeramente.

Tipos de ataques de violencia electoral ocurridos

De 2018 a 2022

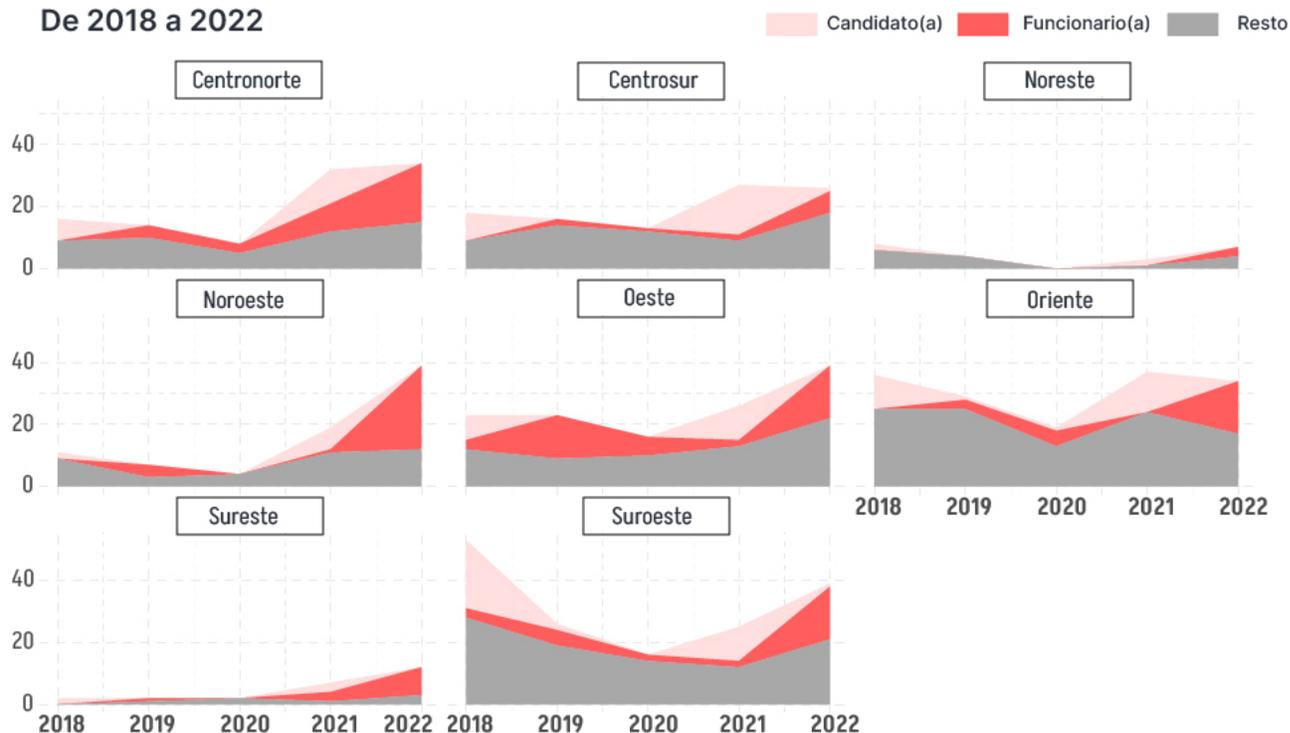


Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

De la misma forma, si llevamos a cabo la misma gráfica con el perfil de las víctimas podemos notar que el aumento de ataques a funcionarios es algo que ha ocurrido en prácticamente todas las regiones del país, aunque el aumento es menos pronunciado en el noreste. La gráfica muestra un patrón muy claro; en años con muchas elecciones (2018 y 2021), los ataques se dirigen más a candidatos, mientras que en años con pocas elecciones (2022 o 2019) se dirigen más a funcionarios. No obstante, en el centronorte del país –que comprende Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí– el aumento de ataque a funcionarios parece ser consistente y ajeno

Víctimas de ataques de violencia criminal-electoral

De 2018 a 2022



Fuente: Base de datos sobre violencia electoral elaborada por Data Cívica

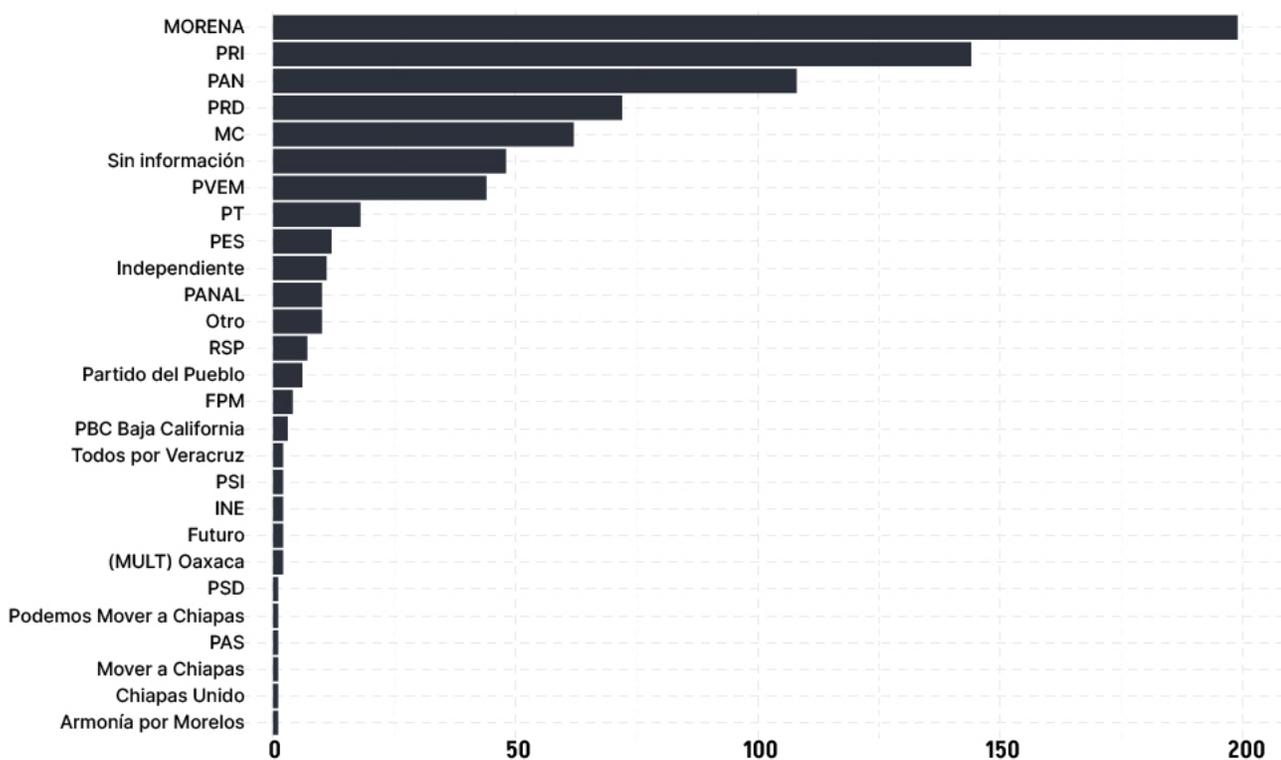
a los ciclos electorales. Cabe mencionar que si bien el patrón es que los ataques a funcionarios aumentan en años con menor número de elecciones, los ataques a este grupo en 2022 rebasan cualquier año de pocas elecciones en todas las regiones.

En cuanto a las diferencias por género y tipo de ataque, vale la pena mencionar que el centrosur del país es la región donde las mujeres representan una mayor proporción de las víctimas de ataques. Mientras en la mayoría de las regiones las mujeres representan alrededor del 14% de las víctimas totales, en el centro del país alcanzan a representar el 25%. La segunda región con más mujeres víctimas, proporcionalmente, con 18%, es el oriente del país, que comprende Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, aunque está bastante cerca del suroeste, con 17%. En casi todas las regiones se mantiene la tendencia que vimos a nivel nacional, las mujeres son más amenazadas y menos asesinadas que los hombres. La única región donde es distinto es el noroeste del país donde 7.5 de cada diez mujeres víctimas fueron asesinadas. Cabe mencionar que esta es la segunda región donde las mujeres representan la segunda menor proporción de las víctimas totales (11%), y la región donde aumentaron estrepitosamente los ataques y asesinatos en el último año.

Víctimas por partido

Si tomamos en cuenta la filiación partidista de las víctimas durante los años de estudio, podemos observar que los ataques se encuentran distribuidos entre partidos con diversidades ideológicas y tamaños. Es decir, el alcance y control que busca tener el crimen organizado muestra que éste no tiene una ideología específica. El total de ataques por partido puede observarse en la siguiente gráfica, si bien, el mayor número de ataques de violencia criminal-electoral en ciertos partidos puede deberse al mayor número de funcionarios en cargos públicos y no a la afiliación partidaria por sí misma.

Filiación partidista de las víctimas de ataques de violencia criminal-electoral



Resumen y reflexiones finales

A partir de la base de datos del proyecto Votar entre Balas es posible identificar las tendencias temporales de la violencia criminal-electoral en México, identificar a las víctimas de tales eventos, así como las manifestaciones de dicha violencia. Al recopilar información de cuatro años, **Votar entre Balas** hace posible el seguimiento de la evolución y cambios en la violencia criminal a lo largo del tiempo, además de abrir nuevas preguntas de investigación, con implicaciones importantes para la política pública del país.

Entre los hallazgos de este primer reporte destaca la multiplicación de ataques asociados con la violencia criminal-electoral desde el año 2018 a la fecha, con mayor incidencia entre personas candidatas a nivel local. Si bien las elecciones son un punto focal para el aumento de estos ataques, su exponenciación y prevalencia a lo largo del año en periodos post-electorales reitera la capacidad de los grupos criminales para incidir en la política, una vez que les es posible influir en los procesos electorales. Visto de esta manera, el ejercicio de la violencia en las elecciones desde hace varios años, pero con mayor demostración en los comicios de 2018, muestra que justamente los procesos electorales son sólo el punto de partida para que las organizaciones criminales puedan ejercer aún mayor presión en las administraciones locales y los funcionarios que las conforman, contra quienes las agresiones han crecido significativamente. En particular, el aumento de los ataques directos a policías –no durante una confrontación u operativo policial– revelan el interés del crimen organizado en controlar el sector de seguridad y así, como lo han reiterado distintos estudios, poder construir redes de protección que les permitan operar con impunidad. Los datos refieren, adicionalmente, que los ataques a funcionarios igualmente se dirigen a aquellas personas en áreas de finanzas y economía, reiterando nuevamente el intento del crimen organizado por establecer controles en las economías locales de las comunidades donde tienen influencia. Destaca, además, que las víctimas de estas agresiones alcanzan a todos los partidos políticos, señalando tanto la penetración de los grupos criminales en el ámbito político, como la naturaleza apartidista de la violencia criminal. A diferencia de otros grupos armados no estatales, como las organizaciones terroristas o guerrilleras, el crimen organizado no busca la prevalencia de uno u otro partido por fines ideológicos, sino la construcción y permanencia de redes de protección, las cuales, como la historia reciente revela, no son únicas de un partido en particular.

Las características desagregadas que ofrece la base de datos que alimenta el proyecto Votar entre Balas igualmente permite un análisis aún más detallado de las víctimas de la violencia criminal-electoral. Entre otras cosas, resulta particularmente interesante la diferencia entre géneros, lo que muestra la mayor incidencia de violencia letal contra los hombres, mientras que las mujeres son víctimas de violencia no-letal, como amenazas. Estas tendencias iniciales abren preguntas interesantes sobre el uso estratégico de la violencia en contra de las mujeres en la política, así como sobre los efectos que tiene en su comportamiento e inserción en la administración pública.

En términos de geografía, se observa que, aunque con variaciones sustantivas, los ataques criminales contra autoridades y candidatos se presentan en todo el país. No hay una región que esté exenta de esta violencia. El occidente y centro del país, sin embargo, sí muestran aumentos significativos de ataques. Cabe señalar que la base de datos que el proyecto Votar entre Balas ha hecho pública permite un análisis aún más desagregado, a nivel municipal, con el fin de identificar determinantes más precisas.

Los hallazgos aquí referidos permiten derivar distintas implicaciones de política pública y una reflexión más profunda sobre el estado actual de la política de seguridad. La mayoría de los ataques registrados en los últimos cuatro años se han dirigido a autoridades y candidatos en las elecciones y administraciones a nivel municipal. No es posible generalizar la motivación detrás de estos ataques. Si bien, en ocasiones, se trata de autoridades coludidas con el crimen organizado, en otras más se trata de esfuerzos del crimen organizado por ejercer el control sobre la política local, con o sin la voluntad de los funcionarios. En cualquiera de estos casos, el interés y capacidad del crimen organizado para incidir en la vida pública señalan la urgente necesidad de fortalecer las instituciones locales, particularmente aquellas del área de seguridad.

Desafortunadamente, la apuesta de las distintas administraciones federales en la última década se ha centrado, por el contrario, en el fortalecimiento de las fuerzas armadas, en detrimento de las policías locales. Sin embargo, una mayor inversión en la capacitación, salario, prestaciones y recursos de inteligencia de las fuerzas del orden a nivel municipal y estatal serían fundamentales tanto para contener la capacidad de influencia de los grupos criminales, como para una mejor labor de investigación y la producción de información fina sobre la violencia y las organizaciones que la ejercen en los distintos municipios del país. Dicha información, de la mano de la subsecuente capacitación de las instituciones locales para su procesamiento y análisis, podría informar sustantivamente el desarrollo de políticas de prevención y operativos puntuales a nivel local. El desarrollo de información con tal nivel de detalle y desagregación, para los más de dos mil municipios del país, es una tarea que rebasa naturalmente a las fuerzas del orden a nivel federal, por lo que la apuesta, sin duda, debería estar en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y recursos de las instituciones locales.

Elección tras elección, observamos el ejercicio directo de la violencia criminal en contra de candidatos y candidatas. De hecho, su perfil es de los más atacados. Esto señala la importancia de generar mapas de riesgo electoral con suficiente anticipación, con el fin de prever posibles problemas y atender sus consecuencias entre el electorado y la propia competencia electoral, dados hallazgos recientes sobre el impacto negativo en la participación electoral y los niveles de competitividad partidista. No obstante, el crecimiento sustantivo de ataques contra funcionarios en el año más reciente señala que la incidencia del crimen organizado en la política trasciende la arena electoral, por lo que la política pública en reacción a tales ataques debe igualmente ir más allá de las elecciones y mapas de riesgo electoral. Es particularmente relevante realizar un análisis puntual de la relación entre los ataques, tanto hacia una misma persona como entre personas vinculadas en una localidad dada. Con tal información será posible conocer las áreas de la administración pública local de mayor vulnerabilidad –economía y finanzas, seguridad, justicia o política social–, considerar opciones para su fortalecimiento, así como dismantelar posibles redes de protección existentes. Esto último, sin embargo, requiere de un compromiso real con el cumplimiento del estado de derecho y con el potencial de abrir nuevas oportunidades para caminos hacia la justicia transicional pendiente en el país.



DATA CÍVICA
Más datos para más personas